

PARTIDOS, DEMOCRACIA, PROBLEMAS DE REPRESENTACION E INFORMALIZACION DE LA POLITICA (El caso de Bolivia)

Por JORGE LAZARTE R.

SUMARIO

I. EL PROBLEMA.—II. LA LÓGICA DE LA POLÍTICA TRADICIONAL.—III. LA CONQUISTA DE LA DEMOCRACIA.—IV. RECOMPOSICIÓN DEL ESPACIO POLÍTICO Y REDISTRIBUCIÓN DEL PODER.—V. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN DEMOCRACIA.—VI. NUEVOS LIDERAZGOS Y PROCESO DE INFORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA: 1. *El perfil del nuevo liderazgo*. 2. *Perfil de los movimientos informales*.—VII. EL DÉFICIT DE REPRESENTATIVIDAD Y CRISIS DE LA FUNCIÓN MEDIADORA DE LOS PARTIDOS.—VIII. INFORMALIDAD POLÍTICA Y LOS RIESGOS DE LA DEMOCRACIA.

I. EL PROBLEMA

Desde el punto de vista político, los años ochenta en América Latina han sido los de la década ganada, a diferencia de los de la década perdida en la economía. En toda la historia de esta parte del mundo, probablemente nunca sus regímenes políticos se habían organizado simultáneamente sobre la base del mismo modelo político democrático representativo.

Desde principios de la década pasada, los regímenes autoritarios fueron cediendo, uno tras otro, a la presión de la sociedad civil y a su propia crisis, dando lugar a la instalación de sistemas políticos democráticos, en los que el mecanismo del voto, en condiciones de pluralismo político, define la titulari-

dad del poder político institucional. Si bien es cierto que el ejercicio del voto fue contemporáneo al nacimiento de la República en el siglo XIX (1), hoy podemos decir que él es ahora una aptitud de la sociedad. La democracia política se ha convertido por primera vez en objeto de consenso societal.

Con todo, los pocos años de funcionamiento han sido suficientes para revelar los defectos e insuficiencias de la democracia, tanto internos como en su relación con la sociedad.

Estas insuficiencias se han expresado, como el caso de Bolivia parece demostrarlo, en un alejamiento y hasta desafección de sectores muy importantes de la población hacia el nuevo sistema político. La abstención creciente de la ciudadanía en las elecciones es una de las mejores pruebas negativas de este fenómeno.

El otro indicador es la aparición de liderazgos y movimientos políticos irruptivos que han descolocado a los partidos y desafiado las previsiones de los analistas y las encuestas. El representado por Alberto Fujimori (2) en el Perú es el más conocido, pero es sólo uno más de los muchos que están proliferando en toda la América Latina. Por las características o la tipicidad de estos movimientos y su probable generalización, los llamaremos informales —o mejor, son la manifestación de un proceso de informalización de la política—, con respecto a la política institucional legal y la institucionalidad tradicional. Para hacer más explícitos estos movimientos y abarcar más dimensiones tomaremos como objeto de estudio el caso boliviano, donde este fenómeno no es tan reciente como el de Fujimori, y dada la persistencia de las condiciones que los hicieron posible, pueden darse otros del mismo género.

La idea central que orientará el análisis es que el sistema político democrático, para ser durable, necesita legitimarse ante la población; esto quiere decir que ésta lo apoye, explícita o difusamente, según sus propias creencias y expectativas (3). Una de las vías de legitimación es la acción de los actores centrales del sistema político democrático, que son los partidos. Los partidos, además de legitimarse con la legitimidad del sistema, deben producir legiti-

(1) ALAIN ROUQUIÉ señala el aspecto sorprendente de la vida política latinoamericana de adhesión «platónica» al sistema democrático occidental y al derecho al voto desde el siglo XIX (véase A. ROUQUIÉ: *L'état militaire en Amérique Latine*, París, Seuil, 1982).

(2) Aún la bibliografía sobre estos procesos políticos muy recientes es escasa. Sobre el «fenómeno Fujimori» puede verse, con todo, una excelente primera aproximación en C. IVÁN DEGREGORI/ROMEO GROMPONE: *Elecciones 1990. Demonios y redentores en el nuevo Perú*, Lima, Mínima I. E. P., 1991.

(3) Existe una vasta bibliografía sobre el tema. Para el caso, puede verse JACQUES LAGROYE: «La légitimation», en *Traité de Science Politique*, vol. I, París, PUF, 1985.

midad del sistema y de ellos mismos ante la sociedad (4). La producción de legitimidad por los partidos depende a su vez de que cumplan una de sus funciones, o quizá su función central, en el sistema político: el de ser estructuras de mediación entre la sociedad civil y el sistema político y estatal (5). Esta función de mediación es tanto más imprescindible cuanto que el mecanismo electoral o la universalización ciudadana es el que define la titularidad del poder.

La aparición de movimientos informales parece estar en relación directa —y sería uno de los efectos— de un fallo de los partidos o del sistema de partidos en tanto estructuras de mediación.

En lo que sigue desarrollaremos la siguiente línea de exposición. En primer lugar nos referiremos a lo que fue la lógica de la política boliviana y el papel de los partidos según esa lógica. En segundo lugar, los cambios en los parámetros políticos con la instalación de la democracia. En tercer lugar, la acción de los partidos en democracia; los desafíos y problemas que enfrentan y no pueden resolver; la percepción dominante en la población acerca de ellos y la tendencia de esta última en su comportamiento político-electoral.

Por último, veremos la resultante negativa en la aparición rápida de nuevos liderazgos y movimientos políticos informales, señalando sus rasgos peculiares que los hacen distintos de los liderazgos y movimientos del pasado populista y del presente democrático-institucional. En conclusión, adelantaremos algunos criterios sobre estos movimientos y su potencial de plantear problemas de gobernabilidad a la democracia.

II. LA LOGICA DE LA POLITICA TRADICIONAL

La insurrección popular victoriosa de abril de 1952 abrió un nuevo período histórico en el país. Cambió las relaciones económicas con la nacionalización de las tres principales empresas mineras, la reforma agraria y la incorporación del Estado como agente principal del desarrollo nacional (6).

Desde el punto de vista político, alteró todas las relaciones de poder anteriores e hizo emerger nuevos actores. De un lado, amplió el espacio político

(4) G. LAVAN ha puesto de relieve esta función de los partidos (véase «Partis et systèmes politiques: interactions et fonctions», en *Revue Canadienne de Science Politique*, II, núm. 1, marzo 1969).

(5) Entre los autores que han marcado esta especificidad está G. SARTORI: *Partidos y sistemas de partidos*, Madrid, Alianza Universidad, 1987.

(6) Sobre el proceso inicial de la revolución, véase JAMES M. MALLOY: *Bolivia: la revolución inconclusa*, La Paz, CERES, 1989.

con la incorporación de hecho y de derecho de los que hasta entonces habían estado excluidos de la política institucional oligárquica. Aparecieron con fuerza propia los sectores campesinos organizados y un fuerte movimiento obrero sindical, principalmente minero, aglutinados todos en la naciente Central Obrera Boliviana (COB) (7). La fuerza de la COB no sólo se apoyaba en su capacidad de aglutinar a todos los sectores subalternos de la sociedad, sino en que contaba con una fuerza armada, las «milicias obrero-campesinas», que surgieron de la derrota militar del Ejército en los tres días de insurrección. Pero juntamente con la COB, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) apareció como el partido más importante de la historia del país (8).

Este partido fue organizado inicialmente por núcleos de la clase media profesional sin porvenir social ni político; apoyándose al principio en el trauma de la guerra perdida con el Paraguay (1932-1935), pronto llegaría a expresar el descontento de los excluidos, primero en una ideología fascizante y más tarde en lo que habría de ser la ideología populista. Su franca actitud antioligárquica, sobre todo en los años cuarenta, lo aproximó a los sectores obreros, hasta convertirse en el partido popular más grande del país y en un partido nacional por su composición social «pluriclasista».

Este partido y la COB dominaron la política boliviana a partir de 1952, y empezaron haciéndolo bajo la forma de «co-gobierno», una alianza entre la central sindical y el partido para gobernar (9).

Los viejos partidos de la oligarquía habían casi desaparecido, y aunque todavía años después daban de cuando en cuando señales de que aún no habían muerto, su existencia era poco menos que fantasmal, pues sus bases de apoyo habían sido disueltas por la revolución. En su lugar, más bien se potenció Falange Socialista Boliviana (FSB), partido con raíces ideológicas en el falangismo español, fuertemente militarizado, golpista y con apoyo social de los sectores afectados por la revolución de abril (10).

Del lado de la izquierda, la revolución diezmó a sus partidos más importantes: en realidad, los únicos existentes. El Partido de la Izquierda Revolu-

(7) Acerca de la COB, véase JORGE LAZARTE R.: *Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia (1952-1987)*, La Paz, Ildis, 1989.

(8) Véase LUIS ANTEZANA: *Historia secreta del MNR*, La Paz, Urquiza. Hasta el momento, el autor ha publicado cinco de los diez volúmenes prometidos. Es una historia más bien descriptiva, pero con abundancia de datos.

(9) Acerca del co-gobierno, véase JORGE LAZARTE R.: *ob. cit.*, segunda parte.

(10) Este partido fue fundado en 1937 bajo la influencia ideológica de José Antonio Primo de Rivera. Fue un partido fuertemente militarizado en milicias desde su origen (véase GUILLERMO LORA: *Historia de los partidos políticos de Bolivia*, La Paz, Colmena, 1987, págs. 383-395).

cionaria (PIR), en 1952 casi no existía, pues a raíz de su participación en el Gobierno de «unidad nacional», luego del derrocamiento del presidente Gualberto Villarroel, con tendencias «nacionalistas», se había dividido en 1950, dando origen al Partido Comunista de Bolivia (PCB); de los que quedaban (viejos dirigentes políticos y sindicales), muchos optaron por incorporarse al MNR después de abril de 1952 (11).

El Partido Obrero Revolucionario (POR), de orientación trotskysta, había quedado como el partido de izquierda más importante antes de 1952, con fuerte influencia en los sindicatos mineros y en algunos núcleos intelectuales de clase media. El hecho de que la revolución se hubiera realizado por una vía distinta a la prevista por ese partido, y dirigida por un partido que no era el del «proletariado», provocó también en el POR una salida de sus cuadros dirigentes más importantes que se incorporaron al MNR (12). Por último, el reciente Partido Comunista era demasiado joven como para tener influencia significativa en los primeros años de la revolución.

Diríamos entonces que el sistema político se organizó alrededor del MNR y de la COB y fue la resultante de las fuerzas que habían tenido rol protagonista en la insurrección de abril de 1952. Con todo, el MNR intentó institucionalizar legalmente el proceso político, sobre la base de un sistema de partidos. En primer lugar, instituyendo el voto universal el año 1952; luego, aprobando una nueva Ley Electoral el año 1956, con la que se realizaron elecciones nacionales este mismo año. Las elecciones siguientes (de 1960 y 1964) también tuvieron lugar bajo esa misma Ley Electoral. Esta Ley, llamada entonces «Estatuto Electoral», establecía, además de la universalidad del voto, el monopolio partidista de la representación popular y ciudadana, con el argumento de que con ello se «eliminaba el aventurerismo electoral» (13), al que habría dado lugar la Ley anterior de 1924 (14), que reconocía la representación directa por provincias sin la intermediación partidaria.

Pero al lado de esta institucionalidad «legal» de un sistema político basado en un sistema de partidos, funcionó otro sistema político, *de facto* y más real, del que uno de los polos articuladores fue precisamente el movimiento sindical y la COB. Desde un principio, la COB fue asociada a las decisiones nacionales, sea bajo la forma de la consulta, la presión o su presencia directa

(11) Véase G. LORA: *ob. cit.*, págs. 219 y sigs.

(12) *Ibidem*, págs. 190 y sigs.

(13) El Decreto Supremo núm. 04315, del mes de febrero de 1956, fijó el Estatuto Electoral.

(14) Esta Ley fue aprobada durante el Gobierno de Bautista Saavedra y permaneció vigente hasta 1952, con modificaciones sucesivas. La Ley limitaba el acceso al voto con barreras censitarias y capacitarias.

en el Gobierno del país, mediante ministros designados por el presidente de la República, pero promovidos por ella o por sus organizaciones afiliadas a las cuales esos ministros representaban.

De otro lado, las organizaciones pertenecientes a la COB, como la Federación de Mineros, o más propiamente sus sindicatos más importantes, designaban en asambleas generales a los candidatos obreros al Parlamento y los imponían en las listas del partido de Gobierno, con la amenaza de no votar y de huelga general si no eran atendidos en su demanda (15).

Con estas referencias queremos decir que la legitimidad en la titularidad del poder no provenía primeramente del acto legal-electoral, sino de otra fuente, que en el caso del MNR fue la victoria de la insurrección de abril. Fue la revolución la que legitimó el hecho de que el MNR fuera gobierno; los trabajadores, a su vez, también alegaban su «derecho» de estar en el Gobierno, por haber sido ellos los que definieron la disputa por el poder «derrotando al Ejército». Las elecciones reforzaban esa legitimidad, pero no la creaban.

Por ello puede decirse que en los primeros años de la revolución hubo una yuxtaposición entre ambas fuentes de legitimidad, de la que la electoral era la menos importante. Más tarde, esta separación se hizo más evidente cuando se rompió la alianza de la COB con el MNR. La base sindical, que al mismo tiempo apoyaba a la COB y al MNR, cuando se planteó el conflicto de lealtad se fue con la central sindical y abandonó al partido, a fines de los años cincuenta y principios del sesenta.

La ruptura, por otra parte, creó las condiciones de inestabilidad política, acompañada de un debilitamiento cada vez mayor del MNR, que a su vez empezó a apoyarse en la misma medida en las FF. AA., reorganizadas en 1953, pero potenciadas como factor de equilibrio de poder a partir de 1957, cuando se produjo la ruptura del «co-gobierno». Parecía que se hubiera retornado a 1952 cuando los que se enfrentaron fueron precisamente el movimiento sindical —y principalmente minero— y las FF. AA. Los años siguientes, hasta fines de los años setenta, fueron los enfrentamientos o alianzas entre la COB y las FF. AA., hasta el golpe de 1971, que inauguró siete años de autoritarismo militar, que ilegalizó a la COB e intervino los sindicatos a través de «coordinadores laborales» designados por el Ministerio de Trabajo (16).

De todo lo dicho puede afirmarse que el espacio político fue una super-

(15) Véase JORGE LAZARTE R.: *El movimiento obrero en Bolivia: crisis y opción de futuro de la Central Obrera Boliviana. Estudios sociológicos*, vol. VII, núm. 19, Colegio de México, 1989, nota 27.

(16) Sobre el período autoritario, J. DUNKEVLEY: *Rebelión en las venas (La lucha política en Bolivia, 1952-1982)*, La Paz, Ed. Quipus, 1987.

posición entre el sistema legal de partidos y el sistema político construido alrededor de dos instituciones no legalmente políticas, pero funcionando en los hechos como actores políticos decisivos y estructuras de representación. Esta situación obligó a los partidos a marchar junto a (si no detrás de) los «sustitutos funcionales» si deseaban en algún momento hacer viable su objetivo de llegar al poder. Es esto precisamente lo que ocurrió entre 1964 y 1980: en todo ese tiempo no hubo Gobierno de partidos, sino Gobiernos con apoyos partidistas. La existencia de los partidos fue, pues, en más de un sentido, subsidiaria de los aparatos sindical y militar, que eran los que en su conflicto definían la titularidad del poder.

Por otra parte, la relación entre esos adversarios era más bien la de «amigo-enemigo», es decir, no había propiamente competitividad, sino contraposición excluyente en la lucha por el poder. Ninguna regla normaba en los hechos la disputa política, o más bien la regla era la que cada uno quería imponer al otro. La política era puro conflicto, en términos absolutos, sin posibilidad de acuerdos negociados entre «enemigos». O dicho de otro modo: la política era la guerra, donde todo valía; sobre todo, el uso de la fuerza (17). En esa guerra, la sociedad casi no contaba sino como escenario donde se desarrollaba la contienda. En estas condiciones se comprende que lo que hacían las «minorías estratégicas» era armarse y prepararse para la batalla. Es así como puede entenderse que, por ejemplo, la COB concibiera que las «aperturas democráticas» eran sólo «coyunturas» entre dos enfrentamientos y que en sus documentos fundamentales afirmara que todos los «métodos de lucha» son válidos.

En esta polarización entre partidos y fuerzas sociales y políticas tuvo mucho que ver la fuerte ideologización del discurso político, que fue a la vez expresión simbólica de la polarización y su refuerzo por la vía de la justificación. La acción política no sólo era legitimada en nombre de intereses, sino de valores absolutos, todos ellos pensados como operadores de visiones de sociedades distintas. Por ello mismo se explica que todo discurso político fundamental, como eran las tesis políticas de la COB, los manifiestos militares y las declaraciones de los partidos, casi siempre, y ritualmente, empezaban por el señalamiento de los valores que los identificaba y daba sentido a su acción, sobre todo si ésta era violenta (18). Pero, a su vez, esta ideologización influyó también en una hiperdiscursivización de la acción política. Es decir, una acción política fuertemente discursiva. Diríamos que el discurso era la

(17) Acerca de la visión militar, referida al período, véase GENERAL GARY PRADO S.: *Poder y Fuerzas Armadas (1949-1982)*, La Paz, Amigos del Libro, 1984.

(18) Véase G. LORA: *Documentos políticos de Bolivia*, La Paz, Ed. Futuro, 1987.

acción. Los líderes políticos hacían su aprendizaje de la política por la vía del discurso. El discurso era lo primero que debían cultivar en la misma medida en que la política se hacía en las calles. Si el discurso era la acción, la acción era la movilización. En todo ello, sin lugar a dudas, debe verse el impacto de la revolución de abril.

Para completar este cuadro debe subrayarse el hecho de que los conflictos sociales tendían a superponerse con los conflictos políticos, o más bien a convertirse rápidamente en conflictos políticos gracias a la capacidad de articulación de la COB, que los canalizaba hacia el Gobierno central, poniéndolo en jaque.

Esto quiere decir que entre el Estado y la sociedad no habían estructuras de mediación, y que los conflictos se presentaban casi siempre como un enfrentamiento directo abierto entre el movimiento sindical con el aparato estatal, planteando problemas insolubles de gobernabilidad que el Estado intentaba resolver por la vía represiva (19). Es esta lógica de la política la que la instalación de la democracia puso en cuestión y alteró profundamente.

III. LA CONQUISTA DE LA DEMOCRACIA

Los siete años de régimen militar (1971-1978) habían sido hasta entonces los más represivos de las últimas décadas. Surgido de un golpe militar, con apoyo civil importante de clase media, el nuevo Gobierno se dio como objetivo inicial resolver los problemas de gobernabilidad de los años anteriores, sobre todo los años 1969-71, y asegurar la estabilidad política, considerada como condición esencial para el desarrollo económico. Para ello se dio a la tarea de eliminar los factores más graves de «perturbación» o de «agitación» (20). La acción represiva estuvo dirigida principalmente contra el movimiento sindical, al que trató de copar desde dentro, en un principio apoyándose en la alianza con el viejo MNR, del que se suponía mantenía aún su influencia sobre el sindicalismo; al mismo tiempo que perseguía a los dirigentes sindicales y a los líderes de la izquierda. El exilio provocado fue el mayor de toda la historia nacional. Pese a todo, los sindicatos de base resistieron, y el año 1974, las FF. AA., asumiendo la totalidad del poder estatal, decidieron la «cesación del mandato de los dirigentes sindicales», «prohibie-

(19) Este tipo de funcionamiento de la sociedad ha sido llamada por HUNTINGTON «sociedad pretoriana» (véase SAMUEL HUNTINGTON: *El orden político en las sociedades de cambio*, Buenos Aires, Paidós, 1962).

(20) Véase, entre otros, el libro de DUNKERLEY: *ob. cit.*, cap. 6.

ron» las huelgas y toda forma de protesta organizada, congelaron los recursos sindicales y nominaron acerca de 2.000 «coordinadores laborales», en reemplazo de los desconocidos dirigentes sindicales. El año 1976, los sindicatos mineros, que fueron los que mejor pudieron preservarse de esta ofensiva estatal, realizaron un congreso nacional, desafiando las amenazas del Gobierno, y resolvieron una huelga general indefinida, que el Gobierno tardó cuatro semanas en sofocar, después de intervenir militarmente las minas. Con estos antecedentes se explica que el proceso de «reapertura democrática» hubiera sido iniciada con una huelga general de cuatro esposas de dirigentes mineros en el exilio, a fines de 1977, que hizo fracasar la «democratización» auspiciada por el Gobierno (21).

El impacto de esta huelga, que con los días había crecido como bola de nieve, fue tan grande que obligó al Gobierno a autorizar el retorno de los exiliados políticos y permitir la reorganización del movimiento sindical. Con todo, las elecciones realizadas en julio de 1978 fueron de tal modo fraudulentas en favor del candidato militar, que la Corte Nacional Electoral tuvo que anularlas, lo que motivó un golpe militar auspiciado por ese mismo candidato, que a su vez fue derrocado meses más tarde por otro militar, bajo cuyo mando se realizaron nuevas elecciones (1979); éstas más fiables que las anuladas anteriormente, tampoco pudieron resolver la elección presidencial. Tuvo que hacerlo el Congreso Nacional, pero en condiciones tales, que salió elegido por un año un presidente civil, resultado del «empate» congresual, lo que impulsó un nuevo golpe militar en noviembre de 1979, que a su vez, por la resistencia popular, después de quince días de tensión sangrienta, dio lugar a otra salida provisional, designando a una mujer presidente de la República, con el mandato de convocar a nuevas elecciones. Estas se realizaron el año siguiente, en junio de 1980, donde las fuerzas de la izquierda reunieron juntas alrededor del 50 por 100 del electorado, y la alianza política de centro izquierda, Unidad Democrática y Popular (UDP) ganó las elecciones. Al mes siguiente se produjo otro golpe militar, seguido de otros en los meses siguientes, hasta que, en octubre de 1982, bajo la amenaza de la COB de paralizar el país con un huelga general, el Gobierno militar cedió el poder a los que habían ganado las elecciones de 1980.

Esta sucesión de fracturas y crisis políticas son un indicador del camino difícil que tuvo que seguir la instalación de la democracia política en Bolivia. Diríamos que en ese borrascoso recorrido, el modelo militar se agotó completamente y se cerró su ciclo. En estas condiciones, el establecimiento de la

(21) Véase ASAMBLEA PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA: *Huelga de hambre*, s. f.

democracia fue menos el resultado de un «pacto de transición» (22) que la imposición popular a unas FF. AA. en proceso de desquiciamiento interno.

IV. RECOMPOSICION DEL ESPACIO POLITICO Y REDISTRIBUCION DEL PODER

El establecimiento de la democracia desde 1982 ha abierto un nuevo ciclo político en el país, cambiando los que habían sido hasta entonces los parámetros y la lógica política nacional.

En primer lugar, la ampliación del espacio político, antes recubierto casi enteramente por el Estado o, más propiamente, por el Gobierno. La democracia ha organizado o liberado un nuevo espacio, que ahora es el lugar privilegiado de los partidos: el sistema político. Este sistema político se interpone entre el Estado y la sociedad, mediando a ambos. La consecuencia más importante de este cambio es una relativa separación entre Estado y sociedad civil, cuya relación directa había caracterizado todo el período anterior.

Esta ampliación fue simultáneamente una redistribución de poder político bajo la forma de la constitución de subsistemas políticos dentro del sistema político democrático. Juntamente con el sistema político nacional tenemos ahora un subsistema político local (el poder municipal), y dentro de poco tiempo tendremos, además, un subsistema de poder regional o gobiernos departamentales. Esta redistribución institucional ha sido también una redistribución real del poder, de tal modo que partidos de oposición que no tienen la titularidad del poder central pueden y en los hechos tienen bajo su control espacios de poder local, y seguramente también lo tendrán cuando funcione el gobierno departamental (23). Esto mismo ha evitado que los partidos detentadores del poder central no ocupen y no puedan ocupar todos los espacios del poder, como fue posible cuando el poder estaba fuertemente centralizado.

A su vez, esta redistribución del poder en un nuevo sistema político ha implicado una división espacial antes no conocida: de un lado, lo que podríamos llamar la macropolítica, centrada sobre el poder central, con su lógica propia de funcionamiento y representación: lugar de lo nacional, de las macrodemandas y de los partidos «nacionales». Es el «poder a distancia».

(22) Acerca de las experiencias distintas y comparativas de transición, véase GUILLERMO O'DONNELL/PHILIPPE C. SCHMITTER/LAURENCE WHITEHEAD (comps.): *Transiciones desde un Gobierno autoritario*, Buenos Aires, Paidós, 1989, vols. I, II, III y IV.

(23) Así, por ejemplo, los partidos de oposición: el MNR tiene el municipio de Santa Cruz, la región más próspera del país; el Movimiento Bolivia Libre (MBL), de izquierda, controla el municipio de Sucre, la capital legal de Bolivia.

Del otro, la esfera de la micropolítica, de lo local y localista; de las demandas más cotidianas y escenario de acción de la multiplicidad de asociaciones colectivas como las Juntas Vecinales, los Clubes de Madres, etc.: es el poder más próximo del ciudadano.

Esta reconfiguración de la política ha tenido efectos sobre los modos de realización de los conflictos. Se ha producido un proceso de descentralización y desplazamiento de las zonas de conflictos y de los conflictos mismos, que ya no tienen en el Gobierno central el único polo de confluencia. Muchos de ellos se dirigen y terminan en el espacio local y pronto lo harán en el departamental. Esta dispersión de los conflictos ha sido favorecida además por la emergencia de zonas o fuentes de conflictos, que, por diversidad irreductible, como son los conflictos regionales o los étnico-culturales, no pueden ser subsumidos bajo la dominación sindical, como lo habían sido en las décadas anteriores. Esta dificultad de centralización y yuxtaposición de los conflictos ha favorecido a la estabilidad política y evitado que el Gobierno central sea desbordado por el volumen o la calidad de las demandas.

Juntamente con todo ello, el nuevo sistema político ha cambiado a sus actores y alterado las relaciones entre éstos. Los partidos se han convertido en los actores centrales y esenciales del sistema, desalojando de él a sus «sustitutos funcionales», como habían sido la COB y las FF. AA. A este reconocimiento institucional-legal se ha sumado en cierto modo el reconocimiento de su necesidad por parte de sectores importantes de la población (24). Con ello, en un cierto sentido, el sistema político real se ha aproximado al sistema legal. En la actualidad, los partidos más significativos del país, de derecha, centro o izquierda, aceptan la necesidad de atenerse a las reglas de juego que determinan los modos aceptables de asumir la titularidad del poder político (25). La COB, por varias razones y también por efectos del propio sistema, ya no es vista en tanto estructura de representación política y está debilitada como estructura de representación social. Por su parte, las FF. AA. ya no constituyen objeto de preocupación pública, y han estado al margen del juego político por lo menos desde 1984, cuando varios de sus miembros intervinieron en el secuestro del presidente de la República. En todo caso, durante toda la dé-

(24) Según la encuesta organizada por la Subcomisión de Reforma Política de H. Congreso Nacional, el 63 por 100 estima que los partidos son necesarios en democracia.

(25) Los cinco partidos más importantes con representación parlamentaria han suscrito un documento el mes de febrero de este año (1991) determinando proponer por consenso cambiar algunas normas básicas de la Ley Electoral. Es la primera vez en Bolivia que se produce este consenso sobre reglas con el apoyo de toda la sociedad.

cada del ochenta no hubo un solo golpe de Estado, lo que es un récord de la historia del país.

En el mismo sentido, las lógicas relaciones políticas han experimentado un cambio sustancial. A la violencia de guerra del pasado acompaña ahora, y de manera preponderante, la percepción de la política como lugar de expresión y representación de los intereses y eventualmente negociación y resolución de los conflictos. La apelación al «diálogo», que, como expresión, casi no existía en el discurso tradicional, es ahora uno de los referentes discursivos comunes. Con ello, la lógica del todo o nada, que implicaba la eliminación del otro, da lugar a la lógica de lo posible, aunque lo posible deba ser obtenido con presiones. Diríamos que el «otro» deja de ser un enemigo para ser un adversario, lo que significa el reconocimiento de su legitimidad. La política ya no es puro conflicto, es también consenso (26).

Por otro lado, la bilateralidad o la dualidad marcada del pasado se abre ahora a la multipolaridad del espacio político con varios actores. Es cada vez más difícil organizar a todos contra uno. Han aparecido fuerzas compensadoras y equilibrantes, que juegan más bien a la moderación, limitando con ello el exceso desestabilizador de las demandas. Uno de estos poderes estabilizadora es, por una parte, la Iglesia, convocada *in extremis* para mediar entre partes y cuyo conflicto se desea no acabe por el desastre. Por otra, son los medios de comunicación, que, sin serlo institucionalmente, en los hechos funcionan como parte esencial del sistema político, presionando, por ejemplo, a una mayor racionalización entre los partidos políticos cuando éstos parecen estar dominados por la lógica anterior. No es menos importante destacar que los partidos, en su propia acción, estén incorporando en sus estrategias a la opinión pública (27), antes completamente inexistente. A su vez, la opinión pública parece estar orientada a evitar la dualización política, convirtiéndose ella misma en el «tercer sujeto». Así, la política se terneariza y se multipolariza.

En la base de todo este nuevo sistema está la constitución de la ciudadanía política en tanto comunidad de individuos que intervienen en la confrontación de decisiones colectivizadas respecto a quiénes deben ser los titulares del poder. Lo importante de esto es que aquí la ciudadanía es asumida por los sujetos imputados y no simplemente otorgada, como había sido, por ejemplo, a partir de 1952, cuando se instituyó el voto universal. La asunción de la ciudadanía tiene además otro alcance, de enorme valor para el país: la admi-

(26) Véase nota 25.

(27) Quizá la aparición reciente de las encuestas de opinión son un indicador de este cambio notable.

sión de que la legalidad del poder otorga cierta legitimidad «formal» que antes no tenía. Es decir, que lo legal ahora funciona como fuente de legitimidad, por lo menos al lado de otras fuentes de legitimidad basadas en lo que la sociedad piensa por tales (28), lo que quiere decir que las elecciones se constituyen en el mecanismo básico de decisión respecto a la titularidad del poder y a la alternabilidad gubernamental, lo que explica que en los últimos años se haya votado en elecciones nacionales y municipales como nunca antes en la historia del país (29).

Por último, se ha producido una alteración de las motivaciones de comportamiento en la población y en el ciudadano. Las orientaciones determinadas por valores están cediendo el paso a un comportamiento condicionado por preocupaciones prácticas e intereses inmediatos individuales o grupales. Los valores expresivos que antes parecían constituir el núcleo de identidades colectivas son neutralizados o sustituidos por orientaciones más instrumentales. Esta es la tendencia cada vez más marcada en las elecciones. La pragmatización de la política debilita su ideologización anterior.

V. LOS PARTIDOS POLITICOS EN DEMOCRACIA

A partir de 1982, los partidos se vieron enfrentados a los problemas emergentes de la instalación de la democracia, entre ellos la necesidad de legitimarse ante la población, demostrando que podían funcionar convenientemente como estructuras de mediación.

Los primeros datos de las elecciones parecían ir en el sentido de satisfacer esta necesidad. En las elecciones de 1980, la concurrencia de los electores había sido de un 75 por 100; esta concurrencia aumentó en las elecciones nacionales de 1985 a más del 80 por 100. Es decir, se estaba por debajo del promedio mundial de abstencionismo (30). Por otra parte, alrededor del 70 por 100 de los electores había optado por concentrar sus votos en favor de los tres partidos más importantes, tanto en las elecciones de 1980 como en las de 1985 (31).

(28) Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la legitimidad popular, medida por los resultados antes que por las normas.

(29) Han habido elecciones en 1978, 1979, 1980, 1985, 1987, y en 1989 dos (mayo y diciembre).

(30) Calculado entre el 25 y el 80 por 100. Véase A. LANCELOT/D. MENIMI: «Participation et comportement politique», en *Traité...*, ob. cit., vol. III.

(31) Véase anexo 1, acerca de la abstención nacional. Véanse también anexos 2 y 3 para el diferencial de voto.

Después de 1985 se producen cambios en el comportamiento del electorado, que van a dar lugar a los conflictos de «representatividad» de los partidos. De un lado, la concurrencia empieza a bajar y a subir el índice de abstencionistas: del 18 por 100 en 1985, la abstención aumenta al 26 por 100 en las elecciones nacionales de mayo de 1989 y al 30 por 100 en las municipales de fines del mismo año. De igual modo, el voto tiende a dispersarse: en 1989 son ya cinco los partidos que concentraron esos dos tercios de la votación. Al mismo tiempo que la diferencia electoral entre cada partido es cada vez menos significativo, aumenta el número de las opciones presentadas el día de la elección: eran ocho en 1979, trece en 1980, dieciocho en 1985 y diez en las últimas elecciones de 1989 (32).

A estas orientaciones del electorado podemos agregar otras tres más constantes. En primer lugar, que en cada elección las opciones más moderadas o de «centro» fueron las más favorecidas: la UDP (33), de centro izquierda, en las elecciones de 1979 y 1980; el MNR, en 1985, y en 1989, nuevamente, el MNR y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), los dos de centro derecha (34).

De otro lado, la existencia de un electorado «flotante» mayoritario, tanto colectiva como individualmente. En el primer caso, distritos electorales importantes, como El Alto de La Paz y la misma ciudad de La Paz, cambian sus opciones mayoritarias de voto en cada elección. Así, si tomamos el departamento en su conjunto, el año 1980 fue favorecida la UDP; en las elecciones de 1985 fue Acción Democrática Nacionalista (ADN) (35); en las de 1989, Conciencia de Patria (CONDEPA) lo fue a su turno. También puede decirse que esos desplazamientos son individuales. Aunque no ha sido cuantificado hasta el presente, las escasas encuestas existentes sobre las últimas elecciones prueban que los ciudadanos cambian de manera significativa sus opciones electorales en cada elección. Lo que nos conduce a referirnos a la siguiente carac-

(32) Véase anexo 4.

(33) Unión Democrática y Popular, organizada en 1978, era una alianza entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB).

(34) El MIR se fundó el año 1971, con fuerte influencia izquierdista y guerrillera. Más tarde, en los años ochenta, se dividió, dando origen a tres partidos: el MIR actual, con Jaime Paz Zamora, presidente de la República desde agosto de 1989; el Movimiento Bolivia Libre, dirigido por Antonio Aranibar, y el MIR (Masas), sector obrero, recientemente incorporado al MBL.

(35) ADN es el partido organizado alrededor del General Hugo Bánzer S., presidente de la República entre los años 1971-1978. Gracias al apoyo de ADN en el Congreso, el jefe del MIR, tercero en las elecciones de marzo de 1989, es presidente de la República.

terística notable: la inexistencia de identidades colectivas partidistas en el electorado. La ciudadanía es abrumadoramente «sin partido» y sin «identidad partidista».

En los últimos años, esas tendencias se han acentuado, dando lugar, en conexión con los cambios ya mencionados en el sistema político, al proceso que hemos llamado de informalización política.

En las elecciones nacionales de mayo de 1989 apareció un partido recientemente organizado, CONDEPA (36), que, contra todo pronóstico, alcanzó la primera votación en todo el departamento de La Paz, que concentra casi un tercio de la votación de todo el país. Su inmediato perseguidor tuvo diez puntos menos que CONDEPA. Este partido ganó la mitad de las diputaciones y dos de los tres senadores del departamento. La victoria fue sorprendente, incluso para el propio partido, pues éste había incluido como candidatos a ciudadanos totalmente desconocidos y sólo para llenar o completar la lista. Con esa victoria fulminante desató lo que luego se llamó en los debates de prensa el «fenómeno palenquista», del nombre de su líder, Carlos Palenque.

En las elecciones municipales de diciembre del mismo año, CONDEPA mantuvo su votación (37), mientras que los demás partidos importantes disminuían su votación al mismo tiempo que bajaba la votación general en el departamento en un 20 por 100 respecto a mayo. Esta votación le permitió ganar por mayoría absoluta la alcaldía de El Alto y la mayoría relativa de los concejales de la alcaldía de la ciudad de La Paz.

El segundo caso es el de Unión Cívica Solidaridad (UCS), de Max Fernández. Este partido no pudo participar en las elecciones de mayo de 1989 al haber sido expresamente eliminado por la Corte Nacional Electoral, que previamente lo había reconocido, pero que aprovechó para anularlo una división interna en el partido en dos ocasiones anteriores (38). La razón política de la eliminación fue la certeza, revelada por algunas encuestas, de que su creciente apoyo lo hacía a expensas de los partidos que tenían el control de tal Corte (39).

Por tanto, sólo pudo participar en las elecciones municipales de diciembre

(36) Fundado el año 1988, en una gran concentración de miles de sus simpatizantes, como pocas veces se vio en los últimos años. En realidad, sólo la COB lograba movilizar una masa comparable de gente.

(37) Véase anexo 5.

(38) Antes de llamarse UCS se denominaba Unión Cívica Nacional (UCN). Un sector del partido, nucleado alrededor de dirigentes del transporte, se separó de Max Fernández y se quedó con el nombre del partido. Más tarde, el grupo se alió con Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), a cambio de algunas diputaciones, y desapareció.

(39) El MNR, el ADN y el MIR, los tres partidos con opción de ser Gobierno.

de 1989, y fue otra revelación política. A diferencia de CONDEPA, muy concentrado en La Paz, este partido tuvo una votación en todo el país, quizá excepto en La Paz (40). Sumados sus votos en todo el país, es el cuarto partido en votación y muy cerca de los dos partidos que lo preceden. Hoy tiene representación en los municipios más importantes del país, y en algunos, por efectos de las alianzas establecidas, dirige las alcaldías. Pero quizá lo más importante de todo es que parece ser el único partido que, de acuerdo a algunas encuestas fiables, está en proceso de crecimiento creciente en intenciones de voto, hasta el punto de que se ha convertido en la primera preocupación de sus adversarios, que, al contrario, se estancan o disminuyen. Lo que pudo haber parecido hace un año demasiado fantástico, actualmente es uno de los más serios candidatos a ganar las próximas elecciones municipales y luego nacionales.

Finalmente, el MNR, que en las elecciones municipales de 1987 fue «castigado» por el electorado, perdiendo un poco más de la mitad de su votación con respecto a 1985. Se pensaba que en las elecciones de mayo de 1989 el proceso de debilitamiento se reforzaría, habida cuenta de que este partido fue el que puso en marcha el decreto 21.060, donde está la matriz del modelo «neoliberal», con todas sus consecuencias sociales gravemente negativas sobre la población, especialmente por haber procedido a la «relocalización» de miles de trabajadores activos en las minas y en la industria. Los antecedentes en otros países parecían confirmar esta posibilidad, puesto que ningún Gobierno que había aplicado medidas tan duras de «reajuste» había logrado sobrevivir en las elecciones (o mejor, las habían perdido todas).

Pero desde el interior de este partido surgió una corriente liberal «modernizadora», identificada como «gonista», por el hombre de su inspirador, que le permitió al viejo partido alcanzar un nuevo brío y ganar las elecciones de mayo de 1989. El «gonismo», a pesar de su diferencia social con los dos anteriores, tiene rasgos importantes de parentesco con ellos y también ha desempeñado un papel determinante en la victoria electoral.

A todo ello pueden sumarse otros intentos, aún no cristalizados hasta el presente, pero ya anunciados, de formar nuevos movimientos políticos del mismo estilo, como el que tiene relación con los «hermanos Arévalo», que en los últimos tiempos promovieron grandes movilizaciones de sus «clientes», principalmente en los departamentos de Cochabamba y Oruro (41).

(40) Véase anexo 6.

(41) Los hermanos Arévalo protagonizaron un escándalo público con la financiera que dirigen, FINSA. Esta financiera pagaba un interés mensual entre el 5 y el 7 por 100 a sus prestamistas. En determinado momento se denunció que FINSA tenía vinculaciones con el narcotráfico. Los Arévalo fueron arraigados y procesados. Los miles de pres-

Esta emergencia rápida de nuevos liderazgos con fuerte apoyo social es a la vez resultado de las fallas de los partidos y de las reorientaciones de la población.

En efecto, los partidos políticos tienen una imagen bastante negativa ante la población, y probablemente la tendencia tiende a acentuarse correlativamente con la importancia que empiezan a tener los políticos informales. Las pocas encuestas que han sido realizadas en los dos últimos años parecen confirmar este aserto. Si nos remitimos a la encuesta elaborada por la Subcomisión de Reforma Política del H. Congreso Nacional del mes de septiembre del año pasado, y que es la más completa sobre el tema, los partidos políticos (42), juntamente con el Parlamento y el Poder Judicial, figuran entre las instituciones en las que menos confianza tiene la población, por debajo de otras instituciones civiles no políticas, como la Iglesia, la prensa e incluso los sindicatos, que hoy atraviesan la peor crisis de toda la historia (43). La percepción dominante en la población es que los partidos son más factores de división que de participación, que sólo defienden sus propios intereses, que no son democráticos y no expresan la opinión de los ciudadanos, que no canalizan las demandas regionales y que son demasiados. Sin embargo, los mismos encuestados admiten mayoritariamente que los partidos son necesarios en democracia, y expresan también mayoritariamente su disposición a participar en la política y en los partidos.

Aquí se advierte una censura muy significativa entre lo que son los partidos en los hechos para la población, tal como ésta los percibe y tal como esa misma población desearía que sean para merecer su apoyo. La radicalidad de su oposición a los partidos tal cual son puede verse en la opinión mayoritaria de los encuestados de que los partidos deben «cambiar todo» y no sólo algunos aspectos (44).

Después de la fecha de esta encuesta es probable que la credibilidad partidista hubiera aún descendido, a raíz de los conflictos entre los partidos acerca del juicio de responsabilidades a los miembros de la Corte Suprema

tamistas salieron a las calles a defender a los Arévalo de las «calumnias» del Gobierno. La presión fue tan grande, que el Gobierno anuló el proceso y los Arévalo fueron recibidos apoteósicamente. Casi simultáneamente, ex dirigentes sindicales anunciaban la formación de un nuevo «Partido de la Izquierda Nacional», con los Arévalo como jefes.

(42) La encuesta fue apoyada por la Vicepresidencia de la República y el Instituto de Investigaciones Sociales (Ildis). El equipo de trabajo fue coordinado por Jorge Lazarte, y formaron parte de él René Mayorga y Carlos Toranzo.

(43) Véase anexo 7.

(44) Un resumen de las cifras fue publicado y comentado por JOGE LAZARTE R. en el periódico *Presencia*, del 11 al 21 de noviembre de 1990.

de Justicia (45) y las acusaciones mutuas de corrupción en el marco de denuncias que los medios de comunicación traspantaron en los últimos meses.

Por tanto, parece haber una correlación entre el debilitamiento electoral de los partidos, la dispersión del voto, las tasas crecientes de abstenciones y la imagen negativa que la población tiene de ellos.

VI. NUEVOS LIDERAZGOS Y PROCESO DE INFORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Los movimientos surgidos en respuesta a esta devaluación partidista han sido calificados de populistas o neopopulistas, para marcar en este último caso las diferencias con los populismos clásicos en América Latina y en Bolivia. Sin el propósito de abrir un debate conceptual e histórico sobre la pertinencia de las dos denominaciones emparentadas, a juicio nuestro se trataría más bien de un fenómeno que, aunque algunos de sus rasgos nos recuerden los populismos del pasado, tienen otros más definitorios que los hacen peculiares, como esperamos pueda constatarse en la exposición que sigue.

Estas peculiaridades, observadas y articuladas en un modelo, nos han inducido a denominar a los nuevos movimientos políticos de informales, pero como no se trata únicamente de estos movimientos, sino de una forma de hacer política, entonces hemos optado por llamar al conjunto «informalización de la política», entendiendo por tal un proceso que se desarrolla al margen y en contra de la política tradicional, pero también de la institucionalidad democrática, con la cual mantienen esos movimientos vinculaciones ambiguas, que van desde su integración instrumental, pasando por la neutralidad afuncional, hasta la probabilidad de convertirse en factores de ingobernabilidad del sistema político.

1. *El perfil del nuevo liderazgo*

En la medida en que el componente esencial de los movimientos que suscitan es la personalización misma de la movilización, quizá sea conveniente trazar el perfil de ese nuevo liderazgo. Nuestra referencia empírica serán los

(45) El juicio promovido por los partidos gobernantes (ADN-MIR y el Partido Democrático Cristiano) abrió todo un proceso de crisis institucional en el país. Después de seis meses, el Senado de la República, donde radica el proceso, acaba de decidir (mayo de 1991) que los magistrados retornen a sus funciones anteriores. Previamente, el Poder Ejecutivo había anunciado la conformación de una comisión especial para proceder a la reforma de todo el poder judicial.

tres líderes políticos que parecen gozar de mayor popularidad y credibilidad en la población, y que también son los que tienen más probabilidades de ganar las próximas elecciones municipales y nacionales. Los tres son: Carlos Palenque, Max Fernández y Gonzalo Sánchez de Lozada. Con todo, nos referiremos a este último con muchas reservas, y sólo porque tiene algunas peculiaridades que lo emparentan con los otros dos, pero que se diferencia de ellos porque la formación de su líder es democrático-americana por los años que pasó en EE. UU., y su base social es de clase media profesional y alta.

Lo que primeramente llama la atención de los tres es que no pertenecen propiamente a la «clase política». No son políticos de carrera o que hubieran hecho de la política una profesión, ni su formación previa es política. Llegaron a la política desde fuera, después de haberse metido en otras esferas privadas; tampoco la política era una opción prevista: son políticos de ocasión más que de vocación. Los tres provienen de la empresa privada. Carlos Palenque es propietario de un canal de televisión y una emisora de radio (46) y conocido como comunicador social y radialista. Antes de embarcarse en la empresa de comunicación fue cantor de música popular (47). Max Fernández es accionista principal de la empresa más próspera del país, la Cervecería Boliviana Nacional. Esta empresa estaba en declinación hasta mediados de los ochenta bajo enormes deudas. Max Fernández compró acciones y se hizo cargo de la dirección; la empresa logró pagar sus deudas, y hoy es la de mayor rentabilidad en el país. Antes de llegar a este lugar, Max Fernández tenía una agencia de venta de cervezas, donde afirma haber empezado su proceso de acumulación de capital (48). Gonzalo Sánchez de Lozada, a su vez, es accionista principal de una empresa minera mediana, COMSUR, una de las más importantes por el volumen de su capital y sus conexiones con el sistema financiero. En su juventud estuvo vinculado con el cine. Diríamos que los tres son, a su modo, empresarios de éxito en sus respectivas áreas, aunque social-

(46) Llamados Radio y Televisión Popular (RTP).

(47) Después del fenómeno «palenquista», muchas tesis de grado universitario han sido hechas sobre este líder. La más importante es probablemente la que luego tomó forma de libro (J. SARAVIA/G. SANDOVAL: *Jach'a Uru: ¿La esperanza de un pueblo?*, La Paz, Ildis, 1991). De los numerosos artículos de prensa puede leerse el primero de ellos: JORGE LAZARTE R.: «Notas sobre el palenquismo y el neopopulismo», en *Presencia*, 9 de junio de 1989.

(48) Sobre Max Fernández, fuera de algunos artículos, no existen propiamente estudios, excepto el de FERNANDO MAYORGA, que le está consagrando una investigación (véase el borrador inicial: *Los nuevos restos de la democracia: La emergencia de la UCS*, mimeo). Respecto a su empresa, el artículo de E. FORONDA «El fenómeno de la Cervecería Nacional», en *El Mundo*, 27 de noviembre de 1988.

mente, el último, Sánchez de Lozada, provenga de una familia de trayectoria política muy influyente y de «alcurnia», a diferencia de los otros dos, de orígenes más bien modestos (49).

Esta ausencia de pasado político personal ha hecho que estén desprovistos del manejo del *savoir faire* de la política, lo que ha hecho que hubiera un cierto aire de ingenuidad política cuando empezaron a meterse en esta actividad, sobre todo en el caso de Max Fernández, a quien muchos políticos avezados lo aprovecharon financieramente (50).

Hacen política sin saber hacerlo. Esto, que puede resultar una desventaja en las lides políticas, constituyen una ventaja hacia la población, que los ve distintos.

Como no son profesionales de la política, tampoco adquirieron, como éstos, la cualidad de ser hombres de discurso; no se destacan por ser «oradores». Palenque habla como locutor; Sánchez de Lozada, por su formación académica y sus años en EE. UU., habla con acento «gringo»; mientras que Max Fernández apenas puede sostener un discurso ordenado. Cuando lo hacen, el vocabulario que usan no tiene casi nada que ver con el vocabulario político tradicional. Su léxico es más bien común, muy cerca de lo trivial, y en el caso de Sánchez de Lozada, con mucho humor, que rompe con el dramatismo del discurso político tradicional. Escasa capacidad discursiva y discurso poco politizado y desideologizado.

En lugar de ello, son más bien hombres de acción, o mejor, que «hacen más y hablan menos». No es puro azar que el más exitoso de ellos, Max Fernández, sea el que menos habla y hace, y que la expresión «max obras» haya sido y sea su estrategia discursiva (51). De alguna manera puede decirse que han reemplazado el discurso por la acción, en la que se cree más que en los discursos y las promesas no cumplidas.

Esto quiere decir que, a diferencia de los partidos tradicionales, que normalmente eran grandes productores de demandas, luego atribuidas al «pueblo», los nuevos líderes más bien recogen las demandas. Esto es particularmente evidente en el caso de Palenque, con su canal de televisión y radio, que hacen de plataforma de expresión de demandas y de quejas de los pobladores. Para éstos, eso parece bastar, aunque luego esas demandas no sean

(49) M. Fernández es «cholo» y con rasgos indígenas, que lo hacen extraño a los criollos del empresariado más poderoso.

(50) El mismo Fernández publicó denuncias con los nombres de los beneficiarios de miles de dólares destinados a la actividad política, pero apropiados por los destinatarios.

(51) En realidad, fue su estrategia electoral en 1989. Max Fernández, en la campaña pedía votos a cambio de obras.

articuladas en políticas alternativas. También lo es con Max Fernández, que no propone nada ni tiene programa político de propuestas alternativas. El satisface las demandas que le formulan los pobladores. En cambio, no lo es del todo con Sánchez de Lozada, cuya base de apoyo es sobre todo de clase media, que demanda más bien bienes simbólicos como «honestidad» y «sinceridad». En todo caso, los tres dan motivos plausibles para ser «creídos».

Los tres han incorporado una nueva valencia en la política o comparten una misma visión de la política: la política es sobre todo sus resultados y no sus intenciones.

2. *Perfil de los movimientos informales*

También aquí lo personal es determinante, empezando por la designación de los movimientos que han suscitado: palenquismo, maxismo y gonismo. La falta de una ideología de encuadre ha sido sustituida por el nombre del líder. La adhesión de los miembros del movimiento es igualmente personal y no una declaratoria de una afiliación doctrinal. Se cree primeramente en el líder y no en el partido que lo respalda. Pero, por otra parte, el partido que organizan y dirigen es posterior al movimiento mismo. Es decir, que palenquismo, maxismo y gonismo son fenómenos previos o bastante independientes del partido, particularmente en el caso de los dos primeros. La estructura partidaria es más bien el esfuerzo por organizar una masa de simpatizantes y movilizarlos con fines electorales. Pero aun en el caso de la existencia de la estructura partidaria, el movimiento es más que el partido, y la organización misma está lejos de representar al movimiento. Tanto en el caso del palenquismo y el maxismo, las estructuras partidarias no son precisamente las más eficaces para la movilización y son además difíciles de hacer marchar. En su lugar, parecen ser más movilizantes otras estructuras «sustitutivas», que, como en el caso de Max Fernández, es la misma empresa, cuyas agencias en todo el país vinculan mejor a los adherentes que el partido mismo. Lo mismo acontece con la radio y la televisión de Palenque; mientras que «goni» está intentando crear una estructura partidaria distinta de la tradicional del MNR (52).

Esta es una notable diferencia respecto a la forma como nacían o nacen los partidos según el modelo tradicional. Primero era el partido, que luego se intentaba convertir en movimiento. Aquí es exactamente al revés, lo que quizá ayuda a explicar que la estructura no tenga tanta eficacia y sea más

(52) El MNR, «gonizado» con nuevos estatutos, ha establecido en todo el país centenares de mesas de inscripción con el fin de reclutar a los viejos y sobre todo nuevos adherentes, en una acción que rompe con la tradición celular del partido.

bien secundaria. Carlos Palenque instituyó su partido, Conciencia de Patria (CONDEPA), el mes de septiembre de 1988, mientras que Max Fernández anunció el suyo, Unión Cívica Solidaridad (UCS), en agosto de 1989, después de que, como dijimos, la Corte Nacional Electoral le despojara de la denominación anterior de Unión Cívica Nacional, atribuyéndosela a un grupo desprendido del «marxismo». En los dos casos, los movimientos mismos son anteriores a su cristalización en partidos. El «palenquismo» existía ya a principios de los ochenta, mientras que el «maxismo» entra en acción a mediados de los ochenta.

Igualmente, la adhesión al movimiento o al partido no tiene nada que ver con la de la militancia de los partidos de los años cincuenta y sesenta, donde se exigía casi una entrega total, tanto más cuanto más ideológico era el partido. Aquí es ocasional, en un proceso permanente y fluido de aproximaciones, compromisos y retiros.

Socialmente, la procedencia de la base de los movimientos para el caso del palenquismo y del maxismo es lo que, genéricamente, se llama sector «informal» o informales: artesanos, pequeños comerciantes, desocupados, migrantes, pobladores; en suma, pobres, desencantados con la política y los políticos, acusados estos últimos de ser responsables de la crisis y de la pobreza de los de abajo. No deja de ser enormemente significativo que en ambos movimientos la participación o adhesión de las mujeres sea superior a la que podría darse en otros partidos (53).

Globalmente, esta base social también está orientada por la lógica de los resultados, y apuesta a los hechos más que a las promesas, muy abundantes en el pasado y generalmente incumplidas. Para esta gente, la política es lo cotidiano, lo que se ve, y fuertemente moralizante cuando se trata de oponerse a los partidos y políticos tradicionales, todos percibidos como insinceros, manipuladores y propensos a la corrupción, si es que no son francamente vistos como tales (54).

Entre esta base y el líder, la relación es directa, sin intermediación, lo que supone que el líder debe estar en proceso de movilización permanente,

(53) Así, según una encuesta, el 61 por 100 de los votos en favor del partido de Palenque eran mujeres, mientras que en otros no llegan al 50 por 100 (véase RENATO HOFFMAN: *Apuntes sobre la democracia desde una óptica cotidiana*, La Paz, Ildis, 1989).

(54) En la mencionada encuesta de la Subcomisión del Congreso Nacional, las cualidades más apreciadas del hombre político son la honestidad y el hecho de hacer obras. Las dos hacen el 64 por 100, lejos sobre las otras cualidades políticas, como el que hable bien (el 2 por 100), o sea inteligente (el 10 por 100). Es decir, que se preferiría un hombre político honesto, aunque no sea inteligente.

a diferencia de los líderes de los partidos institucionalizados más afectos a los conflictos de escenario. Esta movilización es tanto menos evitable cuanto que la relación está basada en una suerte de prestación de servicios. En este aspecto, el prototipo es Max Fernández, a quien rara vez se ve en televisión, pero que la gente puede ver directamente cuando entrega o inaugura «obras». Las inversiones de Fernández son cuantiosas en el país, gracias principalmente a su floreciente empresa. Si en un principio privilegió el mecanismo prebendal de apoyos financieros o de bienes divisibles, las experiencias nada gratificantes de los «aprovechadores» le obligaron a cambiar de estrategia. En la actualidad, prefiere dejar «obras» o bienes no divisibles con beneficio colectivo. Así, multiplicó en todo el país hospitales, escuelas, canchas deportivas, sedes, pavimento de calles, mataderos, hasta el punto de «dar de su bolsillo» recursos a municipios, que son dirigidos por su gente (55). Es decir, sin ser el Estado, se comporta como si lo fuera, supliendo grandemente los vacíos dejados por el «neoliberalismo» o no cubiertos nunca. Entonces estos movimientos son más instrumentales (56) que expresivos y formados más por agregación que por fusión en identidades colectivas, aunque estas necesidades de reconocimiento grupal son también una demanda social que está presente en estos movimientos, pero de manera desigual. Así, en el palenquismo es mucho más perceptible que en el maxismo (57). Más importante parece ser la pervivencia de un viejo paternalismo y una conducta más bien asistencialista tanto en líderes como en el movimiento.

Sin embargo, en el esfuerzo por dotarse de estructuras de encuadramiento, en estos movimientos han aparecido niveles intermedios permanentes que aseguran el funcionamiento de la organización, atendiendo, por ejemplo, en el caso de Max Fernández, las sedes del partido en las ciudades más importantes del país. Estos niveles intermedios están conformados por «militantes» originalmente con antecedentes en otros partidos, y que por ello mismo po-

(55) Max Fernández anunció que gastaría cuatro millones de dólares en las elecciones de mayo de 1989. No se ha cuantificado cuánto invierte en su campaña político-empresarial, pero, para dar una idea, ofertó la construcción de un matadero frigorífico en Santa Cruz, donde el UCS controla el municipio, en alianza con el NMR, con un costo de aproximadamente ochocientos mil dólares.

(56) A su vez, Palenque también oferta servicios de menos cuantía, pero lo hace por miles en su radio y televisión. Cuando su partido controlaba la Corporación de Desarrollo de La Paz, la institución pública del departamento de La Paz con mayores recursos, cada fin de semana entregaba «obras» en las provincias del departamento.

(57) Podríamos decir que, en este sentido, Palenque brinda también bienes simbólicos de reconocimiento de los migrantes de origen rural, enfrentados en la ciudad a culturas no andinas y con problemas de identidad colectiva. Véase el texto de JOAQUÍN SARAVIA/GODOFREDO SANDOVAL: *Jachi'a Uru: ¿La esperanza de un pueblo?*, ob. cit.

seen cierto capital de experiencia que los líderes como Palenque o Fernández no poseen. Estos políticos simplemente hacen la apuesta al ganador o presunto ganador, basados en un puro cálculo de beneficios a futuro inmediato. Es un fenómeno común que éstos anuncien colectivamente la ruptura con su anterior partido (rompan su carnet, como suelen decir) y se incorporen sin tardanza al nuevo partido, al que le juran la misma lealtad que le juraron al anterior (58).

Es para esta franja de adherentes que esos líderes son la oportunidad de vivir de la política, lo que a su vez obliga a éstos a anunciar cada cierto tiempo expulsiones por «deslealtad». Muchos de ellos ahora son miembros de los consejos municipales, y si algo han hecho es demostrar que son ineficientes en la gestión del municipio.

Por último, debe decirse que así como la relación entre el líder y el movimiento está fuertemente personalizada, también es predominantemente no democrática y hasta autoritaria. El líder se comporta como «jefe», y es así como probablemente lo sienten sus bases, lo que quizá es la razón de que los niveles de dirección sean nombrados y no elegidos y de que no existan instancias de consulta permanente ni realicen congresos constitutivos y representativos. La adhesión al líder es cuestión de creencia y fidelidad.

VII. EL DEFICIT DE REPRESENTATIVIDAD Y CRISIS DE LA FUNCION MEDIADORA DE LOS PARTIDOS

Ya nos referimos a la imagen negativa dominante en la población acerca de los partidos políticos. En ello no hay probablemente demasiada novedad. Los partidos nunca tuvieron una buena cara pública, pero lo que fue simplemente una primitiva desconfianza en el pasado se está convirtiendo en hostilidad. Hoy, el «militante» es visto con sospecha, y cualquier candidato «independiente», si la ley electoral le permitiera presentar candidatura, podría eventualmente ganar las elecciones contra todos los «políticos», como ocurre en pequeño en las universidades, una de las instituciones de las más politizadas del país hasta hace poco.

Hay, pues, una resistencia generalizada hacia los partidos en la medida

(58) Recientemente, cuatro centenares de adherentes de ADN, a la cabeza de su responsable político provincial de Cochabamba, se «pasaron» a UCS. Según se supo, varios diputados en conflicto o expulsados de sus partidos estarían pensando conformar la brigada parlamentaria de UCS. En todo caso, es plausible suponer que muchos diputados o personalidades políticas, sin futuro en sus partidos, podrían apostar a lo que se supone sería el partido ganador e incorporarse a UCS.

en que éstos no han podido ajustar su funcionamiento a las demandas y expectativas de la población, lo que ha puesto en entredicho su función central en el sistema político, que es la de ser estructuras de mediación.

Por función mediadora entenderemos la realización de tres tareas esenciales (59): la representativa, la expresiva y la canalizadora. Según la primera, los partidos «representan» a la población que vota por ellos en el sistema político. Pero ya vimos, y existen abundantes datos empíricos sobre ello, que la población no se siente representada por los partidos e inclusive llega hasta a pensar que existe más bien usurpación, lo que puede ayudar a explicar el hecho muy repetido y formulado a su turno por instituciones de la sociedad civil, como campesinos, juntas vecinales, cooperativistas, etc., de organizar «sus» propios partidos políticos.

Si los partidos «representan» legalmente a la ciudadanía, sin embargo, esta ciudadanía, en los hechos, no se reconoce en ellos. Por ello podemos decir que los partidos tienen la «representación política» institucional, pero carecen de representatividad social.

Tampoco están mejor en la función «expresiva», en la medida en que lo que «expresan» en forma de quejas, protestas, impugnaciones, son más bien aquellas que provienen de los mismos partidos y no precisamente de la sociedad. Los partidos creen en general ser la «voz» de los «sin voz», pero, en el fondo, es su propia voz la que escuchan o hacen escuchar, una vez que decidieron que los de abajo no tienen voz. Aunque parezca exagerada esta afirmación, una de las razones esenciales del éxito de Palenque es que, en lugar de hablar por los pobres, dejaba que éstos hablasen por sí mismos en la televisión y la emisora de su propiedad. Había allí una forma de participación directa, que rompía con las intermediaciones distorsionantes.

Igualmente, la tercera función mediadora y canalizadora está en déficit. La población tampoco está persuadida de que sus opiniones y demandas sean recogidas, canalizadas y transmitidas al sistema político. En general, lo que los partidos presentan como demandas sociales son lo que ellos consideran como tales, sin tomarse el trabajo de verificación empírica. Las encuestas demostraron que entre lo que los partidos demandan en nombre de la población y lo que ésta pide, la distancia es abismal, como es el caso, para poner un ejemplo, de la demanda social por el voto directo y uninominal de los diputados, que los partidos más importantes no quieren aceptar, alegando que la población rural no «entendería», aunque en el fondo es la resistencia de los aparatos de no perder el control de sus diputados.

En todo ello puede percibirse la persistencia del viejo modelo de estruc-

(59) Tomamos como referencia la obra de SARTORI, citada en nota 5.

tura y funcionamiento de los partidos o de algunas de sus dimensiones más esenciales, que les están impidiendo cumplir satisfactoriamente su función de mediación política.

De un lado han conservado su estructura autoritaria y el verticalismo en las decisiones. Los dos efectos más inmediatos para el tema que nos interesa es que los candidatos a diputados, que hoy tienen tanta relevancia en la imagen partidista, son nominados por el aparato más que elegidos por el partido. La mayor parte de ellos, sin imagen pública, de pronto, por fidelidad al aparato o al jefe, entran al Parlamento y hacen prueba de inejecución. Esta situación es reforzada por la forma de elección de los diputados en listas conjuntas con las del candidato presidencial.

El otro efecto es la concentración de las decisiones en las cúpulas dirigentes, que a su vez son cooptadas por los «barones» o los «jefes» históricos del partido. Las permanentes fragmentaciones y divisiones de los partidos (60) casi siempre han tenido que ver con esta ausencia de democracia interna, que impide una renovación de las cúpulas dirigentes y ahoga cualquier signo de descontento interno. Esta clausura de las cúpulas, que antes correspondía al modelo militar de partido, ahora puede combinarse, con un alojamiento de las estructuras partidarias, más próximas, por la lógica electoral, al modelo de partido «atrapalotodo» (61).

También los partidos o sus líderes han conservado la atracción por el discurso abundante y redundante, tanto más resistido por la población, que es justificativo y contrario a la acción que realizan. Esto es sobre todo evidente en las campañas electorales, donde los candidatos del partido «atrapalotodo» asumen compromisos electorales que luego no solamente son incumplidos, sino que se hace exactamente lo contrario. Esta distancia entre la promesa del discurso y los cursos reales de acción han devaluado el discurso político hasta el punto de hacerlo sospechoso y detestable. Por eso se explica que la mejor política parece ser ahora la muda acción.

Pero, por otra parte, en un esfuerzo por adaptarse a los cambios políticos, los partidos se han hecho menos ideológicos y más pragmáticos, hasta el punto

(60) El proceso de fragmentación política partidista, o de nacimiento de partidos por división, está descrito en R. RIVADENEIRA: *El laberinto político de Bolivia*, La Paz, Ed. Cinco, 1984. De los seis partidos en 1952, salieron más de 300 contabilizados a principio de los ochenta. Está claro que la inmensa mayoría era sólo «protopartidos», en la expresión de JEAN CHARLOT.

(61) Es la traducción del *Catch-all-party*, formulado por OTTO KIRCHHEIMER (véase O. KIRCHHEIMER: «El camino hacia el partido de 'todo el mundo'», en K. LENK/Franz (eds.): *Teoría y sociología críticas de los partidos políticos*, Barcelona, Ed. Anagrama, 1980).

de convertir el «realismo» político en toda una filosofía que ha eliminado las anteriores inhibiciones ideológicas. Alianzas políticas antes no imaginables se han dado (62), y esto ha sido entendido por sectores importantes de la población como una prueba de un afán desmedido por el poder.

También ha contribuido a deslegitimar a los partidos las denuncias permanentes de corrupción generalizada. Esto sobre todo les atañe a los partidos más importantes, que han tenido a su cargo, desde 1982, la gestión gubernamental. Las acusaciones y contraacusaciones los ha devaluado a todos. A ello debe sumarse la universalización del clientelismo político intrapartidista, tanto menos evitable cuanto que las anteriores lealtades ideológicas se han debilitado. Ahora todo partido tiene que pagar las lealtades con prebendas públicas, que normalmente son la causa de ineficacia por ineptitud.

Tampoco ha variado sustancialmente la inclinación de tomar las demandas del partido como si fueran las demandas de la sociedad. Persiste en ellos la idea autoatribuida de representar al pueblo y de hablar en nombre de él, aunque el pueblo, en los hechos, esté contra ellos, o más bien es un invento discursivo para tomar decisiones en nombre de algo propiamente inexistente en su unicidad.

Por último, los partidos, al hacerse más instrumentales que expresivos, se obligan cada vez más a funcionar como partidos proveedores de servicios, lo que, a la larga, los deslegitima porque asumen compromisos que desbordan sus propias posibilidades o porque, una vez en el «poder», se ven obligados a satisfacer una «clientela» creciente y cada vez más exigente.

Entonces, podemos decir, resumiendo las consideraciones anteriores, que los partidos no pueden abandonar la pura lógica del poder con la que siempre funcionaron. Si, en el pasado, la lógica de la política privilegiaba el poder y la fuerza, y por ello mismo ignoraba o no tomaba en cuenta seriamente a la sociedad, la democracia del ciudadano ha incorporado como principio de acción su propia lógica, poniendo en cuestión al partido constituido casi exclusivamente desde la lógica del poder.

Aquí parece residir el problema central de los partidos, que los inhabilita para realizar adecuadamente su función central de ser estructuras de mediación de y entre la población y el sistema político-estatal.

(62) Por ejemplo, la alianza entre ADN y el MIR, que estuvo en la clandestinidad y exilio durante los años de Gobierno del General Bánzer, jefe de ADN. Esta alianza fue muy mal recibida por importantes sectores de la población. También la COB se alió con el MNR, neoliberal, en un bloque de oposición contra el Gobierno actual. Positivamente, en cambio, fue visto el documento que los empresarios privados suscribieron con la COB demandando reformas políticas inmediatas.

VIII. INFORMALIDAD POLITICA Y LOS RIESGOS DE LA DEMOCRACIA

Hemos dicho que estos movimientos, de los que el palenquismo y el maoísmo son su mejor realización, nacen en contra, en primer lugar, de los partidos y la política tradicional. Se insertan en la brecha abierta por estos partidos, que no logran articularse adecuadamente con vastos sectores pobres de la sociedad, sectores que, a su vez, los asocian con su situación de pobreza. Pero, por otra parte, estos movimientos tienen una relación muy ambigua con el sistema democrático. De un lado, sus líderes no son precisamente de formación democrática. Nada de su pasado nos dice que la democracia fuese en ellos un valor central en sus actitudes; al contrario, tienen tendencias autoritarias vinculadas con el personalismo caudillista que desarrollan.

Tampoco la base social del movimiento es democrática. Los sectores que los apoyan están impregnados de una cultura tradicional no democrática, que es la única que conocen desde siempre, y cuando se organizan en partido e intervienen en las elecciones, lo hacen menos como ciudadanos que como pobladores. En este sentido, la opción por la democracia es sobre todo la opción por la posibilidad de que les resuelva sus problemas una vez que opciones distintas parecen haber fracasado. Es decir, apoyan la democracia porque no hay otra alternativa inmediata atrayente. Por ello mismo podemos decir que esos movimientos no se han constituido ni a favor ni en contra de la democracia, sino fuera, al margen. Son afuncionales con respecto a la democracia. En la medida en que sus líderes acepten el juego democrático, éstos desempeñan un rol integrador al sistema político de masas, que probablemente, sin ellos, no tendrían demasiado interés en participar institucionalmente en las elecciones.

Pero, por otra parte, precisamente porque estos líderes carecen de convicción democrática, puede suponerse que la motivación principal de su acción no será la necesidad de preservación del sistema político democrático, sino la preservación de su liderazgo ante las masas que los apoyan, con la probabilidad de que si estas dos variables entraran en conflicto, optarían por la segunda, poniendo al sistema en situación crítica de gobernabilidad por desbordamiento. Esta posibilidad, por lo menos, ha introducido un enorme factor de incertidumbre tanto respecto al sistema mismo como a las políticas que implementarían si se convirtieran en Gobierno (63).

(63) Esta preocupación es ostensible en los empresarios privados, que, además de ser culturalmente ajenos a los líderes informales como Palenque y M. Fernández, les temen por su «populismo».

Otro factor que puede perturbar la estabilización del sistema político es la tradicional desconfianza de la población, sobre todo pobre, a toda forma de representación indirecta. En ello han jugado tanto tradiciones culturales como experiencias políticas pasadas y presentes expropiatorias de la voluntad colectiva. Esta tendencia, renuente a la «democracia representativa», y la preferencia por la representación directa o la relación sin mediaciones con el líder, al eliminar las estructuras de intermediación, como son los partidos, no es compatible con el sistema político democrático-representativo (64).

En todo caso, mal se comprenderá a estos movimientos si se persiste sólo en descalificarlos y no se explica su emergencia como una respuesta funcional a determinadas demandas sociales no cubiertas. Entre ellas, las de servicio y de bienestar para una población afectada profundamente por la crisis y las que provienen de una falla del sistema de representación. Si los dos tipos de demandas se juntan y no son satisfechas, el sistema político democrático podría verse seriamente desafiado en su estabilidad. Para el caso boliviano podríamos decir que, por presión de la misma sociedad, se ha entrado actualmente en un proceso muy difícil, y probablemente largo, de reforma de todo el sistema político-institucional. Sólo el tiempo dirá si fue exitoso, y ello depende grandemente de que los partidos comprendan hasta qué punto son ellos mismos los causantes de su descrédito.

(64) En cada elección es infaltable la demanda de sectores de la población de nominar ellos mismos, por ejemplo, en las comunidades campesinas o gremios, los candidatos a las concejalías municipales. También es un indicador de esa resistencia la demanda de elección de los diputados de manera directa en distintas uninominadas. Quizá en este caso, como en otros, el problema es precisamente compatibilizar los impulsos participativos directos de la población con las exigencias «funcionales» de la democracia representativa.

ANEXO 1

DATOS DE POBLACION, VOTANTE POTENCIAL, INSCRITOS,
VOTOS EMITIDOS Y PORCENTAJE DE ABSTENCION
(1951-1989)

A Ñ o s	Población	Votante potencial	Inscritos	Votos emitidos	Abstención
1951	3.019.031	Sin datos	204.649	126.123	38,37 %
1956	3.250.000	Sin datos	1.119.047	955.349	14,62 %
1960	3.450.000	Sin datos	1.300.000 (*)	987.730	24,02 %
1964	3.604.165	Sin datos	Sin datos	1.297.249	Sin datos
1966	3.748.000	Sin datos	1.270.611	1.099.994	13,42 %
1978	4.850.000	Sin datos	1.922.556	1.971.968	+ 2,57 %
1979	5.253.624	Sin datos	1.876.920	1.693.233	9,78 %
1980	5.570.109	2.525.000	2.004.284	1.489.484	25,68 %
1985	6.429.226	2.931.123	2.108.457	1.728.365	18,03 %
1989	7.125.000	3.191.000	2.136.560	1.573.790	26,34 %

(*) Aproximadamente.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Corte Nacional Electoral.

ANEXO 2

ELECCIONES REALIZADAS EL 29 DE JUNIO DE 1980

CANDIDATOS	Partido, frente o coalición	Votos	Porcentaje
NÚM. TOTAL DE VOTANTES INSCRITOS.		2.004.284	
1. Hernán Siles Zuazo Jaime Paz Zamora.	(UDP)	507.173	38,74
2. Víctor Paz Estenssoro Nuflo Chávez Ortiz.	(MNRA)	263.706	20,15
3. Hugo Bánzer Suárez Jorge Tamayo Ramos.	(ADN)	220.309	16,83
4. Marcelo Quiroga Santa Cruz José M. Palacios.	(PS-1)	113.959	8,71
5. Luis A. Siles Salinas Benjamín Miguel Harb.	(FDR-NA)	39.401	3,01
6. Wálter Guevara Arze Flavio Machicado.	(PRA-A)	36.443	2,78
7. Guillermo Bedregal Gutiérrez Miguel Trigo.	(MNRU)	24.542	1,87
8. Carlos Valverde Barbery Enrique Riveros Tejada.	(FSB)	21.372	1,63
9. Roberto Jordán Pando Edmundo Roca.	(AFIN)	17.150	1,31
10. Constantino Lima Honorato Sánchez.	(MITKA-1)	17.023	1,30
11. Wálter González Valda Norma Vespa.	(PUB)	10.380	1,25
12. Luciano Tapia Quisbert Eufronio Vélez Magne.	(MITKA)	15.852	1,21
13. Juan Lechín Oquendo Aníbal Aguilar Peñarrieta.	(PRIN-A)	15.724	1,20
<i>Votos en blanco</i>		98.203	7,50
<i>Votos nulos</i>		82.247	6,28
TOTAL VOTOS EMITIDOS		1.489.484	100,00
ABSTENCIÓN		514.800	25,68

FUENTE: Corte Nacional Electoral.

ANEXO 3

ELECCIONES REALIZADAS EN 1985

CANDIDATOS	Partido, frente o coalición	Votos	Porcentaje
NÚM. TOTAL DE VOTANTES INSCRITOS.		2.108.458	
1. Hugo Bánzer Suárez	(ADN)	493.735	28,00
2. Víctor Paz Estenssoro Julio Garrett Ayllón.	(MNR)	456.704	26,40
3. Jaime Paz Zamora Oscar Ejd Franco.	(MIR)	153.143	8,80
4. Roberto Jordán Pando Marcelo Velarde Ortiz.	(MNR-I)	82.418	4,70
5. Carlos Serrate Reich Zenón Barrientos Mamani.	(MNR-V)	72.197	4,10
6. Ramiro Velasco Romero Wálter Vázquez Michel.	(PS-1)	38.786	2,20
7. Antonio Aranibar Quiroga Oscar Salas Moya.	(FPU)	38.124	2,20
8. Genaro Flores Santos Filemón Escobar Escobar.	(MRTKL)	31.678	1,80
9. Luis Ossio Sanjinés Jaime Ponce García.	(PDC)	24.079	1,30
10. David Añez Pedraza José Luis Gutiérrez Sardán.	(FSB)	19.985	1,10
11. Macabeo Chila Prieto Hermógenes Bazualdo García.	(MRTK)	16.269	0,94
12. Guillermo Lora Escobar Ascencio Cruz Cruz.	(POR)	13.712	0,70
13. Raúl Catacora Córdova Guido Capurata Mamani.	(ACP)	12.918	0,70
14. Francisco Figueroa Marcos Chuquímia.	(MNR-I)	11.696	0,60
15. Isaac Sandoval Rodríguez Luis Luján Ticona.	(IU)	10.892	0,60
16. Luis Fernando Mostajo Cavero Delfín Berdeja Taboada.	(FNP)	9.635	0,50
17. Juan Santa Cruz Adolfo Murillo Blanco.	(AUR)	9.420	0,50

PARTIDOS, DEMOCRACIA, PROBLEMAS DE REPRESENTACION

C A N D I D A T O S	Partido, frente o coalición	Votos	Porcentaje
18. Humberto Cayoja Riat Antonio Chiquie Dippo.	(ARENA)	8.665	0,50
<i>Votos en blanco</i>		126.800	7,30
<i>Votos nulos</i>		97.509	5,60
TOTAL VOTOS EMITIDOS		1.728.365	100,00
ABSTENCIÓN		380.093	18,00

FUENTE: Corte Nacional Electoral.

ANEXO 4

ELECCIONES REALIZADAS EL 7 DE MAYO DE 1989

CANDIDATOS	Partido, frente o coalición	Votos	Porcentaje
NÚM. TOTAL DE VOTANTES INSCRITOS.		2.136.560	
1. Gonzalo Sánchez de Lozada Wálter Guevara Arze.	(MNR)	363.113	23,07
2. Hugo Bánzer Suárez Luis Ossio Sanjinés.	(ADN)	357.298	22,70
3. Jaime Paz Zamora Gustavo Fernández Saavedra.	(MIR-NM)	309.033	19,64
4. Carlos Palenque Avilés Jorge Escobari Cusicanqui.	(CONDEPA)	173.459	11,02
5. Antonio Aranibar Quiroga Wálter Delgadillo Terceros.	(IU)	113.509	7,21
6. Roger Cortez Hurtado Jerjes Justiniano Talavera.	(PS-1)	39.763	2,53
7. Víctor Hugo Cárdenas Emmo Emígdio Valeriano Thola.	(MRTKL)	22.983	1,46
8. Genaro Flores Santos Hermógenes Bazualdo García.	(FULKA)	16.416	1,04
9. Sin candidato Waldo Cerruto Calderón de la Barca.	(FSB)	10.608	0,67
10. Luis Sandoval Morón Oscar García Suárez.	(MIN)	9.687	0,62
<i>Votos en blanco</i>		68.626	4,36
<i>Votos nulos</i>		89.295	5,67
TOTAL VOTOS EMITIDOS		1.573.790	100,00
ABSTENCIÓN		562.770	26,34

FUENTE: Corte Nacional Electoral.

ANEXO 5

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Partido, frente o coalición	Siglas	Votos válidos
Conciencia de Patria	(CONDEPA)	156.434
Acuerdo Patriótico	(MIR-ADN)	102.453
Movimiento Nacionalista Revolucionario	(MNR)	44.168
Unión Cívica Solidaridad	(UCS)	31.587
Izquierda Unida	(IU)	11.484
Vanguardia Revolucionaria 9 de Abril	(VR-9)	5.468
Movimiento Socialista de los Trabajadores	(MST)	4.934
TOTAL VOTOS VÁLIDOS		356.528
<i>Votos en blanco</i>		<i>12.535</i>
<i>Votos nulos</i>		<i>46.202</i>
TOTAL VOTOS SUFRAGADOS		415.265

FUENTE: Corte Nacional Electoral.

ANEXO 6

TOTAL GENERAL

Partido, frente o coalición	Siglas	Votos válidos
Acuerdo Patriótico	(MIR-ADN)	300.325
Movimiento Nacionalista Revolucionario	(MNR)	172.714
Conciencia de Patria	(CONDEPA)	168.048
Unión Cívica Solidaridad	(UCS)	147.530
Izquierda Unida	(IU)	73.539
Frente Revolucionario de Izquierda	(FRI)	13.829
Movimiento Socialista de los Trabajadores	(MST)	6.858
Vanguardia Revolucionaria 9 de Abril	(VR-9)	5.468
Vanguardia Socialista de Bolivia	(VS-B)	3.219
Movimiento Federalista Democrático	(MFD)	2.704
TOTAL VOTOS VÁLIDOS		894.234
<i>Votos en blanco</i>		31.661
<i>Votos nulos</i>		77.625
TOTAL VOTOS SUFRAGADOS		1.003.520

FUENTE: Corte Nacional Electoral.

ANEXO 7

INDICE DE CONFIANZA
MEDIDO EN LA ESCALA DEL 1 AL 7

Partidos políticos	3,31 (*)
Iglesia	5,18
Medios de comunicación	5,32
Fuerzas Armadas	3,63
Central Obrera	3,74
Parlamento	3,24
Comités Cívicos	4,20
Poder Judicial	3,50
Corte Electoral	3,37

(*) El promedio es nacional.

FUENTE: Encuesta de la Vicepresidencia de la República y del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.